



REPUBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLIN
SALA QUINTA DE DECISION LABORAL

Proceso:	Ordinario Laboral
Radicación:	05001-31-05-015-2019-00727-01
Demandante:	Blanca Rosa Vanegas Restrepo
Demandado:	Colpensiones
Litisconsortes:	Alberto de Jesús y Luz Mery Zuleta Vanegas
Asunto:	Apelación
Procedencia:	Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín
Magistrada ponente:	Sandra María Rojas Manrique
Temas:	Pensión de sobrevivientes Decreto 3041 de 1966

Medellín, marzo doce (12) de dos mil veintiuno (2021)

En la fecha, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, integrada por los magistrados CARLOS JORGE RUIZ BOTERO, VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO y SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE, como magistrada sustanciadora, procede, conforme a lo dispuesto en el decreto legislativo 806 de 2020, a decidir el recurso de apelación interpuesto por la señora apoderada de la parte demandante, respecto de la sentencia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el 3 de Noviembre del 2020, en el proceso Ordinario laboral de primera instancia, instaurado por la señora BLANCA ROSA

VANEGAS RESTREPO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, proceso al cual fueron vinculados como LITISCONSORTES NECESARIOS POR PASIVA, los señores ALBERTO DE JESÚS Y LUZ MERY DE JESÚS ZULETA VANEGAS. Radicado 05001-31-05-015-2019-00727-01.

1.- ANTECEDENTES

1.1.- DEMANDA

La señora BLANCA ROSA VANEGAS RESTREPO, instauró demanda ordinaria laboral en contra de COLPENSIONES, pretendiendo se declare que es beneficiaria de la sustitución de la pensión de vejez, reconocida a su compañero permanente Manuel Antonio Zuleta Arcila, desde fecha de la muerte del mismo, 29 de septiembre de 1985, con los intereses moratorios o la indexación.

Los supuestos fácticos que apoyan las anteriores pretensiones, se sintetizan en que el señor Manuel Antonio Zuleta Arcila, estaba pensionado por vejez por medio de la Resolución 4723 del 3 de junio de 1975, falleciendo el 29 de septiembre de 1985. Explica que el causante contrajo matrimonio con la señora María Susana Mesa, el 25 de noviembre de 1935, existiendo una separación de hecho entre los mismos, falleciendo la señora Mesa en el año de 1983, sin contar con certificado de defunción que de cuenta de ello.

Continúa narrando que el pensionado fallecido y la actora, iniciaron una convivencia, en el año de 1963, procreando dos hijos llamados Alberto de Jesús y Luz Mery de Jesús Zuleta Vanegas.

Narró que la demandada, por Resolución No. 04554 del 13 de noviembre de 1985, reconoció la sustitución de la pensión de vejez del causante, en favor de sus dos hijos, procediendo la actora, el 25 de mayo del 2007, a reclamar la

pensión de sobrevivientes, la cual fue negada por Resolución No. 027311 del 2008, argumentando que el causante estaba casado con otra persona.

1.2.- CONTESTACIÓN

Por conducto de su representante legal y a través de apoderada, oportunamente **COLPENSIONES**, dio respuesta al libelo introductorio, indicando que es cierto lo relacionado con la negativa de su representada a reconocer la pensión de sobrevivencia a la accionante, debiendo ésta probar que convivió con el causante y que acredita los requisitos para acceder a la pensión de sobrevivencia.

A su vez, propuso las excepciones de inexistencia de la obligación de reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes y retroactivo pensional; inexistencia de intereses moratorios; improcedencia de la indexación de las condenas; buena fe de Colpensiones; imposibilidad de condena en costas; prescripción; compensación.

Notificados de manera personal los hijos del causante y de la demandante, quienes fueron vinculados al proceso como litisconsortes necesarios por pasiva, los mismos no efectuaron pronunciamiento alguno.

1.3.- SENTENCIA DE PRIMER GRADO

Mediante fallo proferido el 3 de noviembre del 2020, el Juzgado de conocimiento declaró que la demandante no es beneficiaria de la pensión de sobrevivientes reclamada, absolviendo a Colpensiones de todas las pretensiones instauradas en su contra y condenó en costas a la actora.

1.4.- RECURSO DE APELACIÓN

Demandante

La apoderada de la actora interpuso el recurso de apelación, manifestando que no se valoró en forma conjunta la prueba documental y testimonial, ni el expediente administrativo allegado por Colpensiones que contiene la investigación administrativa que surtió el extinto ISS, en la cual declararon que la actora tenía la calidad de compañera permanente del causante, como se estipuló en la Resolución 27311 del 2008, en la que se estableció que la accionante tiene la calidad de compañera permanente del pensionado fallecido y que no se accede a la solicitud de la pensión, por cuanto no cumple con los requisitos del Decreto 3041 de 1966, en concordancia con el artículo 2 de la Ley 33 de 1973.

Asevera que en la investigación realizada por el ISS, estaban las declaraciones de las señoras Elvia Aguiar de Córdoba y Gladis Amparo Ruíz Parra, así como la declaración extra proceso de la señora Blanca Rosa, que si bien en este estrado no pudo rendir el interrogatorio de parte, ello obedece a su avanzada edad, ya que tiene 92 años y no cuenta con muy buena tecnología para hacerlo, existiendo declaraciones rendidas ante el Juez Octavo Civil Municipal de Medellín, desde el 17 de octubre del año 1985, suscritas por el señor Manuel Salvador Villegas y Libardo de Jesús Saldarriaga, teniendo la intención de que comparecieran al proceso, pero algunas de esas personas se encuentran fallecidas, no siendo posible ratificar su testimonio.

Agrega que frente al testimonio de la señora María Dolly Villegas de Villada, se debe tener en cuenta todo el tiempo que ha transcurrido, por lo que algunos recuerdos son borrosos.

Afirma que la Resolución 27311 es un acto administrativo que goza de validez, sin ser tachado en el proceso, de igual forma en la contestación de la demanda, el abogado dice que, aunque hubiere existido convivencia entre el afiliado

fallecido y la actora, no era procedente ese reconocimiento, toda vez que la aplicación de la normativa, era la que no permitía acceder a la prestación.

Explica que en la certificación No. 452020 expedida por el comité de defensa judicial de Colpensiones, se establece que existía convivencia marital en forma continua, bajo el mismo lecho como marido y mujer, entre la demandante y el causante por más de 15 años y hasta el momento del fallecimiento y en la parte final de dicho documento, se indica que la actora tenía la calidad de compañera permanente del fallecido.

Ahora, respecto a la manifestación que hace la Juez, consistente en que la reclamación se hizo después de 20 años, pone de presente, tal y como lo dijo uno de los testigos, que la demandante presentó reclamación en el 2007 y estuvieron intentando con otros apoderados, los cuales les pedían dinero para realizar los trámites, pero realmente no presentaron las reclamaciones oportunas, entonces por esto no se llevó a estrado judicial oportunamente la controversia, por desconocimiento de la parte.

Menciona que teniendo en cuenta que al momento del fallecimiento del causante, la prestación fue reconocida a favor de los hijos de la pareja, ellos se encargaron de sostener a la demandante, quien siempre estuvo en la casa, entonces ella se vio beneficiada en ese momento, hasta que cumplieron la mayoría de edad.

1.5.- ALEGATOS DE SEGUNDA INSTANCIA

Dentro de la oportunidad procesal para presentar alegatos, se pronunciaron los apoderados de las partes. La apoderada de Colpensiones indicó que el causante contrajo matrimonio católico el 25 de noviembre de 1935 con la señora María Susana Mesa, debiendo tenerse en cuenta que de acuerdo con la fecha del fallecimiento del mismo, la normatividad aplicable era el Decreto 3041 de

1966, sin cumplir la demandante con los requisitos exigidos en el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, dado que no solo la norma no contemplaba la figura de compañera permanente como beneficiaria de la pensión de sobreviviente, sino que el causante, tenía vínculo matrimonial vigente, el mismo que finalizó con el deceso del señor Manuel Antonio, llamando la atención sobre la declaración juramentada rendida por la demandante ante el ISS en el año 2008, cuando dijo que la cónyuge de su compañero, falleció 2 meses antes de él morir y que tuvo varios hijos con ella, saltando a la vista incongruencias en cuanto al supuesto deceso de la cónyuge, ya que en la demanda dicen que fue en 1983, sin tenerse prueba sumaria del deceso.

Solicita que en caso de reconocerse la prestación, no se condene a los intereses moratorios, toda vez que éstos sólo proceden cuando existe mora en el pago de las mesadas pensionales y en el caso objeto de litigio, no existe reconocimiento de prestación económica alguna, adicional la norma aplicable es la de la fecha del fallecimiento del causante, la cual no contempla los intereses moratorios, debiéndose declarar la prescripción de las mesadas, autorizando los descuentos en salud y exonerando de costas.

Por su parte, el apoderado de la actora, cita la Sentencia SL 4200 del 2016, resaltando que la Corte Constitucional, en Sentencia C-482 de 1998, declaró la inexequibilidad de la expresión “siempre que ambos hubieren permanecido solteros durante el concubinato”, debiendo tenerse en cuenta que para cuando fallece el causante, su cónyuge, la señora María Susana Mesa, ya había fallecido, lo que se prueba con el registro de defunción que reposa en el expediente administrativo aportado por Colpensiones, en donde se indica que falleció el 25 de julio de 1985, por lo que a falta de cónyuge, será tomada en cuenta la compañera permanente para el reconocimiento de la prestación de sobrevivientes, precisando que existen declaraciones testimoniales que dan fe de la convivencia de la pareja, aunado a que, en su concepto, Colpensiones aceptó la calidad de compañera permanente de la actora, en la resolución que le negó la prestación a la misma.

2. CONSIDERACIONES

2.1.- COMPETENCIA DE LA SALA

Inicialmente, debe advertirse que la competencia de esta Corporación está dada por los puntos que son objeto de apelación, entendiendo que las partes quedaron conformes con lo resuelto de más; de conformidad con el artículo 57 de la Ley 2ª de 1984; los artículos 10 y 35 de la Ley 712 de 2001, que modificaron los artículos 15 y 66A del C.P.L y de la S.S., respectivamente.

2.2.- HECHOS ESTABLECIDOS EN EL TRÁMITE DE LA INSTANCIA

Quedaron acreditados en el trámite del proceso y no son objeto de controversia los siguientes hechos:

- Que el señor Manuel Antonio Zuleta Arcila nació el 28 de junio de 1914 y falleció el 29 de septiembre de 1985 –ver folio 16 y expediente administrativo-.
- Que la actora y el causante procrearon dos hijos, llamados Alberto de Jesús y Luz Mery de Jesús Zuleta Vanegas, quienes nacieron el 6 de junio de 1968 y el 19 de diciembre de 1970, respectivamente –ver folios 23 y 24-.
- Que al señor Manuel Antonio Zuleta Arcila, le fue reconocida la pensión de vejez, por medio de la Resolución No. 4723 de 1975, a partir del 11 de octubre de 1974, en cuantía de \$1.235,12, más los incrementos pensionales por 2 hijos a cargo, tal y como se desprende de los documentos obrantes en el expediente administrativo aportado por Colpensiones.

- Que de conformidad con la documentación obrante en el expediente administrativo, se tiene como el causante contraído matrimonio con la señora Susana Mesa de Zuleta, el 25 de noviembre de 1935, la misma que falleció el 25 de julio de 1985.

- Que por Resolución No. 04554 de 1985, se le concedió la pensión de sobrevivientes, causada con ocasión del fallecimiento del señor Manuel Antonio Zuleta Arcila, a Alberto de Jesús y Luz Mery Zuleta Vanegas, en su calidad de hijos del causante.

2.3.- PROBLEMAS JURIDICOS A RESOLVER

Debe determinar la Sala:

¿Si la demandante reúne los requisitos del Decreto 3041 de 1966 y la ley 90 de 1946, para ser beneficiaria de la sustitución pensional causada con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, señor Manuel Antonio Zuleta Arcila?

2.4.- TESIS

Los problemas jurídicos planteados se resuelven bajo la tesis según la cual, la demandante tiene derecho a la pensión de sobrevivientes reclamada, por cuanto la calidad la calidad de compañera permanente del causante y beneficiaria de la prestación le fue reconocida en sede administrativa, además de acreditar en el proceso, el requisito mínimo de convivencia por un periodo superior a los tres años, por lo que la sentencia debe ser REVOCADA.

2.5.- PREMISAS NORMATIVAS

Como lo ha precisado de tiempo atrás la jurisprudencia de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, el derecho a la pensión de sobrevivientes debe ser dirimido, por regla general, a la luz de la normatividad vigente al momento del deceso del afiliado o pensionado, entre otras véase sentencias CSJ SL 36135 del 10 Jun 2009, SL42828 del 1º Feb 2011, SL 7358 (46780) del 23 jun 2014.

Los artículos 20 y 21 del Decreto 3041 de 1966, vigentes para la fecha del fallecimiento del señor Manuel Antonio Zuleta Arcila, establecen los requisitos para obtener la pensión de sobrevivientes, así como los beneficiarios de la misma, así:

“ARTICULO 20. Cuando la muerte se de origen no profesional, habrá derecho a pensiones de sobrevivientes en los siguientes casos:

- a. Cuando a la fecha del fallecimiento el asegurado hubiere reunido las condiciones de tiempo y densidad de cotizaciones que se exigen, según el artículo 5º para el derecho a pensión de invalidez;*
- b. Cuando el asegurado fallecido estuviere disfrutando de pensión de invalidez o de vejez según el presente reglamento.*

ARTICULO 21. La pensión a favor del cónyuge sobreviviente será igual a un cincuenta por ciento (50%) y la de cada huérfano con derecho igual a un veinte por ciento (20%) de la pensión de invalidez o de vejez, que tenía asignada el causante, o de lo que le habría correspondido a la fecha del fallecimiento excluidos los aumentos dispuesto en el artículo 16 del presente reglamento. Cuando se trate de huérfanos de padre y madre, la cuantía de la pensión se elevará hasta el treinta por ciento (30%) para cada uno”.

A su vez el artículo 55 de la ley 90 de 1946, señala:

Artículo 55. para los efectos del Artículo anterior, los ascendientes legítimos y naturales del asegurado tendrán unos mismos derechos, siempre que, por otra parte, llenen los requisitos exigidos en su caso; y a falta de viuda, será tenida como tal la mujer con quien el asegurado haya hecho vida marital durante los tres años inmediatamente anteriores a su muerte, o con la que haya tenido hijos; si en varias mujeres concurren estas circunstancias, solo tendrá un derecho proporcional las que tuviere hijos del difunto.

2.6.- CASO CONCRETO

Por medio de la Resolución No. 027311 del 30 de septiembre del 2008, la demandada negó la pensión de sobrevivientes a la demandante, indicando que no obstante, existir convivencia con el causante no era procedente reconocerle la pensión, por cuanto el causante estaba pensionado bajo el Decreto 3041 de 1966, norma que solo consagra la pensión de sobrevivientes para la cónyuge, no cumpliendo con los requisitos exigidos por el artículo 21 del Decreto 3041 de 1966, concordado con el artículo 2 de la Ley 33 de 1973, precisando que la prestación fue sustituida a los dos hijos que tuvo la demandante con el causante –ver folios 18 a 19-.

No obstante, lo anterior, como lo señaló la juez de instancia, la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral, ha precisado que la inexistencia de cónyuge activa el derecho de la compañera permanente a la pensión de sobrevivencia o sustitución pensional, así se indicó en la Sentencia SL 4651 (76046) del 19 de agosto de 2020, magistrado ponente Fernando Castillo Cadena:

“...En efecto, esta Corporación, de forma reiterada ha adoctrinado que el artículo 55 de la Ley 90 de 1946 previó la posibilidad de que ante la inexistencia de cónyuge que se lo discutiera, la compañera permanente del causante podía adquirir el derecho a la sustitución pensional; para ello basta memorar las sentencias CSJ SL12896-2014, CSJ SL1131-2015, y CSJ SL4200 – 2016; en esta última en la que se dijo:

3º) Superado lo anterior, el problema jurídico que le concierne resolver a la Corte estriba en dilucidar si para la fecha del fallecimiento del causante -1986- existían normas que habilitaban a la compañera permanente para adquirir la pensión de sobrevivientes.

La respuesta a tal planteamiento es afirmativa, toda vez que para la época de la muerte del asegurado, se encontraban en vigor las Leyes 12/1975 y 113/1985, que claramente establecían el derecho de la compañera permanente de sustituir las pensiones de los trabajadores del sector privado y público.

En esa dirección, importa resaltar que la primera de esas leyes, en su art. 1º, dispuso:

Artículo 1º.- El cónyuge supérstite o la compañera permanente de un trabajador particular o de un empleado o trabajador del sector público, y sus hijos menores o inválidos, tendrán derecho a la pensión de jubilación del otro cónyuge si éste falleciere

antes de cumplir la edad cronológica para esta prestación, pero que hubiere completado el tiempo de servicio consagrado para ella en la Ley, o en convenciones colectivas

Es cierto, como lo pone de presente el opositor, que dicha previsión literalmente cobija a las viudas o compañeras permanentes de los trabajadores que hubieren fallecido una vez cumplido el tiempo de servicios, pero sin la edad legal o convencional. Sin embargo, esta Corte en sentencia CSJ SL, 7 jul. 2009, rad. 25920, interpretó nuevamente esta disposición para incluir en ella a las supérstites de los pensionados o con derecho a la pensión de jubilación.

En efecto, en la prenombrada providencia, esta Sala haciendo uso de un argumento a fortiori, consideró que si el derecho a la sustitución estaba consagrado en favor de la cónyuge o compañera permanente de los trabajadores que les faltaba la edad legal o convencional para adquirir el derecho, con mayor razón debía otorgarse en el evento de la muerte de quien reúne la totalidad de las condiciones pensionales o se encuentra pensionado. Expuesto en otros términos, si el derecho se concede en favor de la beneficiaria del causante que no alcanzó a completar los requisitos de jubilación, lógicamente debe reconocerse a la beneficiaria de quien los tenía completos”...

Así las cosas, la demandante, en calidad de compañera permanente, puede ser beneficiaria de la prestación, pues si bien es cierto el causante contrajo matrimonio con la señora Susana Mesa de Zuleta, ésta falleció el 25 de julio de 1985, (véase registro civil de defunción 03.CD folio 53 pdf. F140), es decir, antes de la fecha del deceso del causante (29 de septiembre de 1985).

Prueba de la convivencia

En torno al tema de la convivencia, punto neural en el presente litigio, debe señalarse que, como lo argumenta la recurrente, la calidad de compañera permanente fue admitida por el entonces Instituto de Seguros Sociales en la Resolución No. 027311 del 30 de septiembre del 2008, en la cual se indica:

“Que mediante verificación administrativa, que realizó el ISS, a través del Grupo de Verificación de la Gerencia Seccional de Pensiones, una vez practicadas las pruebas, con respeto de los principios que consagra el Artículo 5 del a Ley 58 de 1982, esto es con la audiencia de las partes y con la relación de las partes y con la relación de los medios de prueba solicitados por el (la) peticionario(a) y decretados por el Instituto, analizado el acervo probatorio, se pudo establecer fehacientemente, que SI existía convivencia marital de forma continua bajo el mismo techo como marido-mujer al momento del fallecimiento del pensionado fallecido y la solicitante señora BLANCA

ROSA, por más de 15 años y hasta el momento de la muerte.” (Subraya de la Sala)

A este respecto, la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL4531 del 06 de junio de 2019, recordó, que tal reconocimiento tiene como efecto en el proceso judicial, que la parte pretensora queda relevada de la prueba , excluyéndose el hecho del debate probatorio:

“Conforme a lo anterior, ciertamente el Instituto de Seguros Sociales a través de la resolución de marras, admitió que el actor era beneficiario de la indemnización sustitutiva, más concretamente por ostentar la condición de compañero permanente de la asegurada fallecida y, en esas condiciones, erró el juzgador en la apreciación de esta prueba, desatino que indudablemente lo condujo a la comisión del yerro que le imputa la censura.

De donde fuerza concluir, que el Instituto de Seguros Sociales al momento de expedir la Resolución n.º 13521 de 2006 (f.º 7 y 8) prueba hábil en casación acusada por la recurrente, estaba claro que la señora Emilse Sánchez Durán, era beneficiaria de la pensión de sobrevivientes, como también, que la prestación reclamada, la negaba porque después de estudiada la historia laboral, el causante no: «[...] acredita la fidelidad del 20% al Sistema que equivale a 476 semanas efectivamente cotizadas, de lo que se infiere que el asegurado no dejó causado el derecho a la pensión de sobrevivientes». (Subrayamos).

Lo anterior, cobra mayor vigor por lo adocinado por esta Sala en sentencia CSJ SL, 1º nov. 2011, rad. 42182, reiterada entre otras, en sentencia CSJ SL, 8 may. 2013, rad. 44313, donde quedó consignado:

[...]

Y esa es dable derivarla de la actuación surtida dentro del trámite administrativo interno que adelanta la entidad de seguridad social para resolver una petición de pensión, como por ejemplo cuando allí se establece la condición de cónyuge de la interesada y miembro del grupo familiar del asegurado fallecido y por ende beneficiaria de la prestación de sobrevivientes o en su defecto de la indemnización sustitutiva, y se allega prueba de ello al proceso, o, porque dentro de la contienda judicial al darse contestación al libelo demandatorio, el demandado ISS admite como cierto el hecho de la convivencia entre cónyuges; quedando en ambas eventualidades, por fuera del debate probatorio tal exigencia legal, trayendo como consecuencia que bajo estas circunstancias, en la sentencia a proferir se tenga por demostrado ese requisito. (Se subraya).

De otro lado, la Sala encuentra que de la prueba recaudada, analizada en su conjunto, es posible concluir la existencia de una convivencia entre la demandante y el pensionado fallecido, por el término mínimo de tres años, exigido por el artículo 55 de la ley 90 de 1946, tal y como se pasa a explicar:

En el sublite, rindió declaración la señora MARÍA DOLLY VILLEGAS VILLADA, vecina de la demandante y el causante en Aranjuez, quien explicó que la pareja vivía en una casa enseguida de la suya, que llegaron al barrio como en 1975 o 1976, que para esa fecha los hijos de la pareja tenían entre 7 y 8 años. Respecto a la actividad económica de la actora y su compañero, explicó que Blanca siempre ha sido ama de casa, que al comienzo tuvo una tienda que duró si mucho 2 años, en la que solo vendía mecató, mientras que el causante era pensionado de la empresa Apolo, pero laboraba como celador. Desconoce si antes de ser vecina de la pareja, el causante tenía otra relación.

En cuanto a la fecha hasta la cual se dio la convivencia de la pareja, afirmó que fue hasta que Manuel se murió, sin recordar hacía cuantos años se produjo su deceso, explicando que el causante estuvo hospitalizado y cree que murió en la clínica, afirmando que ella no fue a visitarlo porque laboraba, pero sí asistió al entierro, creyendo que Mery la hija lo cubrió, porque ella ha sido la que ha cuidado a la actora. Agregó que la demandante era beneficiaria en salud del causante. Frente al tema de la cónyuge del causante, adujo que no conoce a la señora María Susana Mesa, ni le conoció más hijos al causante, siendo clara en afirmar que la demandante y el pensionado, no se llegaron a separar, en el tiempo en el que ella los conoció, siendo éste el encargado de sostener el hogar.

De igual forma rindió declaración el señor ALBERTO FIDEL CASTRO OLARTE, testigo, que afirma conocer la convivencia, aunque no aporta detalle de la misma, toda vez que fue claro al indicar que no tenía mucho contacto con con la pareja, que no los visitaba porque se mantenía trabajando,

También fue aportada al plenario, la investigación administrativa realizada por el extinto ISS, el 10 de junio del 2008, vinculante para Colpensiones, respecto a la cual en el trámite judicial no se formuló oposición o tacha alguna, precisando que no se requiere la ratificación de las declaraciones, para que puedan ser apreciados como documentos privados, en tanto ello no fue solicitado por la parte demandada y se practicaron con la audiencia de ambas partes.

En el referido trámite administrativo se recibió la declaración de las señoras ELVIA AGUIAR DE CÓRDOBA y GLADYS RUÍZ PARRA, quienes afirmaron que conocieron al causante desde hacía 40 años y 14 o 15 años, respectivamente, que conocieron que convivía con la demandante de manera permanente, convivencia que se dio hasta la muerte del pensionado, quien murió por una enfermedad (infarto), afirmando que la pareja tuvo dos hijos llamados Alberto y Mery, y no le conocieron otros hijos.

Asimismo, rindió declaración juramentada el 8 de mayo del 2008, ante funcionarios investigadores del ISS, la señora MARÍA DOLLY VILLEGAS VILLADA, la misma que declaró en la audiencia realizada por el Juzgado de conocimiento, sin evidenciarse contradicciones entre lo dicho en esa oportunidad y lo declarado en la audiencia.

Declaró ante el ISS la hoy reclamante, afirmando, inicialmente, que vivió por 22 años con el causante, pero aceptando luego, que primero no había convivencia permanente que el asegurado fallecido la visitaba cada 8 días y que iniciaron convivencia definitiva cuando su hijo Alberto tenía 7 años y su hija Mery 5 años, que primero vivieron en Caicedo por 3 años, luego estuvieron en Campo Valdés por 1 año y finalmente compraron la casa en Aranjuez.

También se aportaron al expediente administrativo las declaraciones de los señores MANUEL SALVADOR VILLEGAS Y LIBARDO DE JESUS

SALDARRIAGA, las cuales tienen especial relevancia para esta Sala, habida cuenta que fueron rendidas en trámite extraprocesal ante el Juzgado Octavo Civil Municipal de Medellín, el 17 de octubre de 1985, esto es, 18 días después del fallecimiento del causante, oportunidad en la cual los deponentes ante la autoridad judicial declararon conocer de la convivencia de la pareja, por un periodo de 10 años, el primero y 20, el segundo, indicando que la hoy demandante convivía bajo el mismo techo con el pensionado fallecido para el momento de la muerte y que el mismo era quien velaba económicamente por su compañera y sus dos hijos. (folios 139 y 139 del expediente administrativo)

Se aportó, igualmente, el informe final, expedido por la oficina de investigaciones del ISS, fechado el 5 de septiembre del 2008, en el cual concluyen que, si existió convivencia de manera permanente entre el causante y la actora, por más de 15 años, hasta el momento del fallecimiento de aquel.

Así las cosas, se concluye que le asite derecho a la demandante a la prestación, siendo procedente revocar la decisión absolutoria revisada en apelación, en primer lugar, en atención a que la calidad de beneficiaria fue reconocida por el ISS en sede administrativa y en segundo término, porque la demandante acredita una convivencia con el causante superior a los 3 años exigidos por el artículo 55 de la ley 46 de 1990.

Fecha a partir de la cual se reconoce la pensión y cuantía de la misma

La accionante solicitó la pensión de sobrevivientes el 25 de mayo del 2007, la cual fue negada por medio de la Resolución No. 027311 del 30 de septiembre del 2008, presentándose la demanda el 1º de noviembre del 2019, por lo que las mesadas causadas con anterioridad al 1º de noviembre del 2016, se encuentran prescritas.

Atendiendo al valor de la pensión de vejez reconocida al causante, la pensión de sobrevivientes a reconocer, equivale al salario mínimo legal mensual vigente de cada anualidad, por 13 mesadas, liquidando la misma así:

Año	# mesadas	Valor pension	Total Retroactivo
2016	3	\$ 689.454	\$ 2.068.362
2017	13	\$ 737.717	\$ 9.590.321
2018	13	\$ 781.242	\$ 10.156.146
2019	13	\$ 828.116	\$ 10.765.508
2020	13	\$ 877.803	\$11.411.439
2021	2	\$908.526	\$1.817.052
		TOTAL	\$ 45.808.828

En consecuencia, el retroactivo a reconocer por concepto de pensión de sobrevivientes, causado entre el 1° de noviembre del 2016 y el 28 de febrero de 2021, asciende a la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$45.808.828)**. Así mismo, a partir del 1° de marzo del 2021, la entidad deberá continuar reconociendo a la demandante, una mesada por concepto de pensión de sobrevivientes, por valor de \$908.526, por 13 mesadas al año.

Sobre el retroactivo deberán realizarse los respectivos descuentos para el Sistema de Seguridad Social en Salud.

Respecto del tema de los intereses moratorios

En cuanto a la pretensión relacionada con el reconocimiento de los intereses moratorios, se advierte que la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, a partir de la sentencia SL 703 de 2013, con ponencia del doctor Jorge Mauricio Burgos Ruiz, flexibilizó el criterio, según el cual, la aplicación de los intereses moratorios del artículo 141 era objetiva:

“La Sala como consecuencia de su nueva integración ha considerado pertinente moderar esta posición jurisprudencial, para aquellos eventos en que las actuaciones de las administradoras de pensiones públicas o privadas, al no reconocer o pagar las prestaciones periódicas a su cargo, encuentren plena justificación bien porque tengan respaldo normativo, ora porque su postura provenga de la aplicación minuciosa de la ley, sin los alcances o efectos que en un momento dado puedan darle los jueces en la función que les es propia de interpretar las normas sociales y ajustarlas a los postulados y objetivos fundamentales de la seguridad social, y que a las entidades que la gestionan no les compete y les es imposible predecir”.

En el presente caso, no procede el reconocimiento de los intereses moratorios, por cuanto la entidad demandada, al resolver sobre la solicitud de la prestación radicada el 25 de mayo de 2007, se ajustó a la normatividad vigente, que excluye a la compañera permanente del grupo de beneficiarios de la sustitución pensional, teniendo en cuenta que fue a partir de la sentencia CSJ SL12896-2014, que se reivindicó el derecho de la compañera permanente del pensionado fallecido para acceder a la prestación.

Procede la indexación que fue solicitada por la parte actora, la cual constituye un factor que compensa la pérdida del valor real de los dineros que en su oportunidad debieron pagarse, por lo que se condenará a COLPENSIONES, a pagar la indexación de los valores reconocidos a favor de la actora, desde el momento en que se causó cada una de las mesadas pensionales y hasta el pago efectivo de la obligación, resultado de aplicar la siguiente fórmula:

$$\text{Indexación} = \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}} \times \text{Capital} - \text{Capital}$$

Costas en ambas instancias a cargo de Colpensiones.

3.- DECISION

En consonancia con lo expuesto, la Sala Quinta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley

FALLA:

1.- Se **REVOCA** la Sentencia de Primera Instancia proferida por el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Medellín, el 3 de Noviembre del 2020, en el proceso ordinario instaurado por la señora BLANCA ROSA VANEGAS RESTREPO en contra de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES, proceso al cual fueron vinculados como LITISCONSORTES NECESARIOS POR PASIVA, los señores ALBERTO DE JESÚS Y LUZ MERY DE JESÚS ZULETA VANEGAS, para en su lugar condenar a la demandada, a reconocer a la demandante la sustitución pensional, causada con ocasión del fallecimiento de su compañero permanente, señor Manuel Antonio Zuleta Arcila, a partir del 1° de noviembre del 2016, pagando como retroactivo causado entre el 1° de noviembre del 2016 y el 31 de enero del 2021, la suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS (\$45.808.828)**. Así mismo, a partir del 1° de marzo de 2021, la entidad deberá de continuar reconociendo a la demandante, una mesada por concepto de pensión de sobrevivientes, por valor de \$908.526, por 13 mesadas al año, Igualmente la accionada deberá pagar a la accionante la indexación de los valores reconocidos a la misma, desde el momento en que se causó cada una de las mesadas pensionales y hasta el pago efectivo de la obligación. Sobre el retroactivo a pagar deberán efectuarse los respectivos descuentos para el Sistema de Seguridad Social en Salud.


2.- COSTAS en ambas instancias a cargo de Colpensiones, las de primera instancia serán tasadas por la señora Juez y en esta instancia se fija con agencias en derecho la suma de \$1.817.052.

3.- Se ordena la devolución del expediente digital al Juzgado de origen, con las actuaciones cumplidas en esta instancia.

El fallo anterior queda notificados a las partes por estados, de conformidad con el Artículo 295 del Código General del Proceso.

Los Magistrados,


SANDRA MARIA ROJAS MANRIQUE


CARLOS JORGE RUIZ BOTERO


VÍCTOR HUGO ORJUELA GUERRERO

La presente providencia fue notificada por estado No.45 fijado en la secretaría de la sala del Tribunal Superior de Medellín, a las ocho de la mañana (8:00 a.m.) del 15 de marzo de 2021.

RUBEN DARIO LOPEZ BURGOS
Secretario